

Editorial

Claridad antes que incertidumbre

Cuando se habla de programas sociales, no se discuten solo partidas presupuestarias ni ajustes administrativos. Se habla de derechos, de certezas y, en regiones como Aysén, de condiciones mínimas para sostener la vida cotidiana. Por eso, la controversia generada por la publicación de oficios gubernamentales que advertían restricciones, reducciones o readecuaciones en programas estatales con fuerte impacto social no podía pasar inadvertida.

El problema no fue únicamente el contenido de esos documentos, sino la forma en que la información llegó a la ciudadanía: fragmentada, confusa y con mensajes contradictorios desde el propio oficialismo. Cuando eso ocurre, el daño no es solo político. También se instala una sensación de inseguridad en miles de personas que dependen de esos apoyos para enfrentar una realidad ya suficientemente compleja.

En Aysén, esta situación adquiere una dimensión mayor. Aquí los derechos sociales no son una discusión abstracta ni una consigna de campaña. Son una necesidad concreta frente al alto costo de la vida, la dispersión territorial, las dificultades de acceso a servicios básicos y la permanente desigualdad respecto del centro del país.

Una señal ambigua sobre salud, subsidios, apoyo social o programas de acompañamiento no se interpreta como un debate técnico: se vive como una amenaza directa a la estabilidad de las familias.

Por eso preocupa que el Gobierno haya debido salir reiteradamente a aclarar información que debió ser clara desde el inicio. Más aún cuando las tensiones no solo se instalaron en la opinión pública, sino también dentro de los propios partidos que respaldan a la administración. Cuando las diferencias internas se expresan sin una conducción política clara, lo que se debilita no es solo la imagen del Gobierno, sino la confianza de la ciudadanía.

Ordenar la casa, como se ha dicho desde La Moneda, no puede limitarse a una disciplina comunicacional de emergencia. Debe traducirse en una conducción política más sólida, con definiciones claras y una estrategia que evite que decisiones sensibles se transformen en crisis

autoinfligidas.

Porque en política social, la improvisación cuesta caro.

No basta con aclarar después. La responsabilidad está en anticipar, explicar y construir confianza antes de que la incertidumbre se transforme en conflicto. La ciudadanía no puede enterarse por filtraciones, interpretaciones parciales o disputas internas de eventuales cambios que afectan directamente su bienestar.

En regiones extremas, esa exigencia es todavía mayor. La distancia con el poder central ya genera una sensación permanente de postergación. Si además la información llega tarde o mal explicada, esa brecha se profundiza.

Aquí no se trata de defender o cuestionar automáticamente una readecuación presupuestaria. Todo gobierno debe administrar recursos y tomar decisiones complejas. Pero cuando esas decisiones tocan áreas sensibles, la transparencia y la comunicación dejan de ser un complemento: pasan a ser parte esencial de la política pública.

El Ejecutivo necesita comprender que gobernar también es explicar. Y explicar bien.

No se puede pedir tranquilidad social cuando los mensajes oficiales generan más dudas que certezas. Tampoco se puede construir respaldo ciudadano si la primera reacción institucional siempre es corregir versiones que ya circularon sin control.

Aysén necesita estabilidad, no ruido político. Necesita certezas, no interpretaciones contradictorias. Necesita saber que los derechos sociales no dependen del desorden administrativo ni de disputas internas de Santiago.

La preocupación ciudadana es legítima. Y la respuesta del Gobierno debe estar a la altura: menos improvisación, más claridad; menos rectificaciones, más conducción.

Porque cuando lo que está en juego son derechos sociales, comunicar mal también es una forma de gobernar mal.